

Lluís Rabell

Crisis, izquierda y cuestión nacional

Desde siempre, la cuestión nacional ha sido una de las problemáticas más complejas y controvertidas entre las corrientes marxistas. Y, por lo que respecta al Estado español, ha representado uno de los mayores escollos para el movimiento obrero y la izquierda en general: éste ha sido el teatro de las mayores torpezas y las peores renunciadas a la independencia política. El período de convulsiones sociales hacia el que nos precipita la crisis del capitalismo globalizado, lejos de diluir o rebasar las cuestiones nacionales pendientes, tenderá a agudizar su conflictividad. Sin embargo, ésta se desarrollará bajo nuevos parámetros, en medio de un colapso del modelo económico neoliberal español que tornará insostenibles para millones de hombres y mujeres las consecuencias de los desequilibrios y agravios inherentes a la arquitectura política heredada de la transición. La cuestión nacional se teñirá de problemática social. Y, a su vez – mal que pese a quienes creen que la lucha entre las clases podría desenvolverse como un enfrentamiento de límpidos contornos, desprovisto de “interferencias”, entre el capital y el mundo del trabajo –, la problemáticas sociales se entrelazarán, se conjugarán o incluso aparecerán mediadas por las cuestiones nacionales.

Es pues necesario que la izquierda vuelva a estudiar y a debatir en profundidad acerca de todo ello. Y es que el inicio de esta nueva etapa viene marcado también por el agotamiento del proyecto político que agrupó durante los últimos veinte años al grueso de las corrientes que se situaban a la izquierda del PSOE. El final de IU como marco apto para el desarrollo de las fuerzas contestatarias del sistema –así lo consideramos no pocas y pocos de quienes hemos militado en sus filas–, poniendo a la orden del día la construcción de una nueva izquierda anticapitalista, obliga también a hacer balance e inventario de las experien-

cias y nociones que han tenido curso hasta ahora. Nos obliga, como diría nuestro buen compañero Daniel Bensaïd, a “*considerar cuidadosamente lo que llevaremos en nuestros bagajes al iniciar esa singladura*”.

El poso ideológico de IU

IU agota su impulso fundacional legando a la izquierda social algunas provechosas referencias, pero también un poso de confusión y no pocos prejuicios acerca de la cuestión nacional. El PCE dice ahora que “*se acabó el pacto constitucional de 1978*”. Es indiscutible el desgaste de los dispositivos políticos e institucionales surgidos de aquel acuerdo entre la oposición de izquierdas y los herederos del franquismo, empezando por la propia monarquía y siguiendo por unas “autonomías” varias veces remozadas y cada vez más incapaces de contener la problemática para la que fueron concebidas. Pero no es menos cierto que, si algo acabó con alguien, fue aquel “pacto constitucional” quien acabó con el PCE. Y su derrota ideológica ha pesado en toda la trayectoria de IU.

El pacto constitucional supuso, entre otras muchas frustraciones, cerrar en falso las aspiraciones democráticas que las sociedades vasca, gallega y catalana habían ido templando en su resistencia a la dictadura franquista. Decepción tanto más dolorosa cuanto que la misma *Carta Magna* que reconocía la existencia de esas “nacionalidades históricas” les negaba la soberanía y dejaba sus anhelos bajo la tutela del Rey... y la inquietante vigilancia de las Fuerzas Armadas. Así, se enquistó el conflicto vasco, con una secuela de dolor que se prolonga hasta hoy; se condenó Galicia a recorrer un penoso camino desde la pervivencia del caciquismo hasta la conquista de su dignidad como pueblo; se sumió a la sociedad catalana y a su potente movimiento obrero en un mar de contradicciones paralizantes que aún no ha superado.

Tradicionalmente, IU ha defendido el derecho a la autodeterminación de los pueblos ibéricos. Pero aquel pacto comportó que la comprensión más chata acerca de la cuestión nacional, que los prejuicios y recelos hacia los “nacionalismos periféricos” que anidaban en la cultura política del PCE se tornaran predominantes en su seno y acabasen vertiéndose en IU – generando a su vez reacciones no menos confusas, pero de signo contrario. A lo largo de estos años ha ido tomando cuerpo en esta izquierda una doctrina que ha pretendido certificar, justificar de algún modo a posteriori las vergüenzas y renunciaciones de la transición. ¿Derecho a la autodeterminación nacional? De acuerdo, pero a condición de no pretender seriamente ejercerlo. Es decir, ni por asomo se contemplaba la posibilidad de una secesión a partir de una expresión democrática de la voluntad popular. Cuando se situaba una perspectiva de progreso, invocando el objetivo de una República federal, el discurso del PCE ha puesto siempre en guardia contra cualquier tentación “confederalizante”. De hecho, la unidad indisoluble de esa República Federal parecía un remedo de la “*unidad inquebrantable*” de la nación española que

proclama la Constitución. “*¡Una buena República y no diecisiete!*”, hemos oído mitinear a Paco Frutos en más de una ocasión.

Ese horizonte inequívocamente “unitario” ha servido para encubrir una práctica política repleta de inconsecuencias y adaptada al centralismo. Desde el PCE se ha ido construyendo un discurso que ha constituido en cierto modo un envoltorio de izquierdas, la coartada clasista e incluso internacionalista, de un nacionalismo español opresor y excluyente. (La persistencia de las acciones armadas de ETA ha sido durante tres décadas el pretexto recurrente para invocar una “*unidad de los demócratas contra el terrorismo*” que abrazaba a los testaferreros del franquismo, y ha servido para enmascarar la violencia institucional del Estado. Este capítulo de nuestra reciente historia ha gangrenado la izquierda hasta la médula, acostumbrándola a “cuadrarse ante la bandera” en cuanto suena un disparo. Una experiencia así merecería sin duda una reflexión singular y pormenorizada. Pero eso nos alejaría de nuestro razonamiento principal.)

Perversión del discurso

Es característico de un nacionalismo dominante, asentado por la fuerza de las armas desde hace siglos, que no necesite afirmarse como tal. “Nacionalistas” son, por ejemplo, vascos y catalanes, que reivindican una lengua y una cultura distintas y que aspiran a instituciones propias. Frente a ellos, el nacionalismo español no se yergue como un nacionalismo, sino como “el orden natural de las cosas”. Proclama defender un “idioma común” –sojuzgando y marginando aquellos que, distintos del castellano, no serían patrimonio de toda la ciudadanía. Y, sobre todo, impone una “soberanía” en que las –amplias– minorías nacionales que se reconocen como tales quedan disueltas y subsumidas en la noción globalizadora de “pueblo español”, fuente suprema y última de cualquier ordenamiento jurídico. La perversión de la izquierda ha consistido justamente en dar un barniz progresista a semejante planteamiento antidemocrático. A veces, acreditando la tesis de que “todos los nacionalismos son iguales” (es decir, de raíz burguesa), e incluso que los “periféricos” son peores o más sospechosos. Naturalmente, no se trata de comparar las “virtudes” –terriblemente semejantes entre sí– de las respectivas clases poseedoras de aquí y de allá, por otra parte imbricadas unas y otras en el mundo de los negocios. Pero sí cabe distinguir entre un nacionalismo que reivindica derechos democráticos –relativamente progresista– y un nacionalismo que tan sólo defiende privilegios. Una distinción decisiva desde el punto de vista de las relaciones de la izquierda con el pueblo.

Otras veces, la negación práctica del derecho de autodeterminación ha tenido ciertas pretensiones teóricas: las naciones-Estado corresponderían al pasado y no tendrían sentido alguno en el siglo XXI, en la época de la globalización y en plena construcción europea. Semejantes argumentos, caros sobre todo al social-liberalismo, olvidan que la globalización –que representa ante todo la dictadura de las

multinacionales y las grandes corporaciones financieras—, lejos de diluir los estados existentes, los utiliza como vector de organización de los mercados y de las relaciones sociales que permiten su explotación. Hoy asistimos al colapso del modelo económico español, basado en la especulación inmobiliaria, el desarrollo del sector terciario y del turismo, los bajos salarios y la transformación del país en pista de aterrizaje para las multinacionales —que hoy están deslocalizando a marchas forzadas. Ésos son el lugar y el papel asignados al Estado español y, en grado diverso, a sus distintos territorios en la arena mundial. La “España de las autonomías” ha permitido implementar esas transformaciones... al tiempo que las limitaciones en las competencias y recursos de las “comunidades irredentas”, que han visto fragilizada su estructura económica y social y se encuentran particularmente zarandeadas por la crisis, dejan en la mayor indefensión a su ciudadanía. En otras palabras: los procesos globalizadores han retirado importantes elementos de soberanía de manos de los Estados, desplazándolos hacia grandes centros internacionales de poder —y eso ha contribuido en cierto modo a poner “la miel en los labios” de las naciones sin Estado, que esperaban un debilitamiento del viejo centralismo o incluso ser convocadas a un nuevo concierto democrático de los pueblos. Pero tales procesos no han trasladado ni un ápice de soberanía a dichas naciones. La globalización ha significado una nueva frustración de las aspiraciones al pleno desarrollo del autogobierno y a la construcción nacional. El ciclo recesivo del capitalismo globalizado conjugará esa frustración con una rápida degradación de las condiciones de vida de amplias franjas de la población. La globalización no sólo no habrá atenuado las “viejas” cuestiones nacionales, sino que acabará exacerbándolas y confiriéndoles un papel aún más relevante en el desarrollo vivo de la lucha de clases durante los próximos años.

Anticapitalismo y libertad nacional

Finalmente, la izquierda ha recurrido a la invocación del “internacionalismo” y la “solidaridad de clase” para justificar el hecho de que miraba de soslayo las reivindicaciones nacionales. Ahí es donde la discusión se torna más delicada y donde una izquierda anticapitalista debe afinar sus conceptos. Una izquierda anticapitalista es, por definición, internacionalista: el capitalismo constituye un sistema mundial y sólo puede ser vencido y substituido por un nuevo orden social avanzado por la acción de un movimiento y de un proceso de transformación revolucionaria de carácter internacional. El primer deber de una izquierda combativa es, por lo tanto, favorecer la mayor unidad entre la clase trabajadora—por encima de su diversidad étnica, nacional o cultural—, así como la solidaridad entre los pueblos. Desde ese punto de vista debemos abordar en toda su complejidad las cuestiones nacionales. Si defendemos el derecho a la libre autodeterminación —incluido el derecho a la separación— no es porque propugnemos separatismo alguno, ni porque exaltemos ningún sentimiento nacional. Es, en primer lugar, porque aquella unidad no es posible sobre la base de agravios, desigualdades o

imposiciones. Partidarios de una estrecha cooperación, no concebimos ningún proyecto que no se base en la libre adhesión. ¿Qué futuro tendría una República que mantuviese el odioso centralismo de la monarquía como cimiento entre las naciones peninsulares?

La “unidad de clase” que invoca a veces sin mucha convicción la vieja izquierda sólo puede forjarse a través de la lucha y la realización de las soluciones más radicalmente democráticas y audaces en el terreno nacional. Por poner el ejemplo de Catalunya, desde *Revolta Global* defendemos sin ambigüedad la perspectiva de una República Catalana: la realidad nacional del país y lo prolongado de la injusticia a que se ha visto sometido hacen insoslayable una salida basada en el pleno ejercicio de la soberanía democrática. A partir de ahí, cabe decir que ni somos independentistas, ni estigmatizamos o nos asusta la opción de la independencia. Nuestro objetivo estratégico –trazado de hecho por todo el desarrollo histórico anterior– es el de una federación ibérica de libre adhesión y el de una Europa de los pueblos, capaz de conjugar el pleno desarrollo de sus potencialidades culturales y nacionales con la cooperación, la solidaridad y el progreso colectivo. Incluso si la opción mayoritaria de la ciudadanía fuese la independencia –opción cuyo respeto cabría de todos modos exigir, pero a favor de la cual tampoco sería teóricamente descartable que, en determinadas circunstancias, pudiese inclinarse la izquierda anticapitalista–, se trataría muy probablemente de un episodio, de un avatar de importancia y duración imprevisibles, en el camino de la federación. Ya en su época, considerando esa eventualidad en el fragor de la guerra civil, Trotski era del parecer que resultaría decisivo en ese sentido el peso específico adquirido por la clase trabajadora en el seno de la nación catalana.

Añadamos que conviene huir de un cierto “jacobinismo” –muy extendido incluso en la extrema izquierda– que, cuando no puede negar la problemática nacional, la aborda como un engorroso vestigio del pasado o como una inevitable concesión a las veleidades culturales de la “pequeña burguesía”. Ni los sectores más plebeyos de la sociedad son ajenos al deseo de un florecimiento cultural, ni el progreso hacia una sociedad socialista se hará a través de la uniformidad, sino muy probablemente mediante estrategias de desarrollo de la diversidad, de tal modo que la plena eclosión de las potencialidades de todas las lenguas y culturas represente para las próximas generaciones la vía más segura hacia una civilización superior. Cabe decir también que es en ese sentido –y en modo alguno movidos por la evocación exaltada de gestas medievales, o por connivencia con pretensiones hegemónicas del nacionalismo catalán– que defendemos también la perspectiva de una libre unión de los *Països Catalans*. Durante años, con habilidad y constancia, el centralismo español ha alimentado todo tipo de suspicacias y resentimientos entre las comunidades valenciana y balear hacia Catalunya. En realidad, se trata de la lucha por impedir un acercamiento que pudiera propiciar la temida eclosión de una potente construcción nacional. Inevitablemente, esa

división ha sido un vector fundamental del devastador avance del modelo neoliberal, de la irrefrenable urbanización de la costa levantina, de un desarrollo insostenible y depredador, generando enormes bolsas de parasitismo y corrupción social en torno a la especulación y propiciando envenenados conflictos por el agua. La defensa de la cultura y del territorio aparece así inseparable de la reivindicación nacional democrática. Y ésta revela una vez más su potencial de subversión del sistema.

Concluamos diciendo, sin embargo, que hoy en día nada pervierte tanto un justo tratamiento de la problemática nacional como la adaptación de la izquierda –incluida la izquierda “transformadora”– a las políticas liberales. Tal es el caso de las alianzas gubernamentales bajo hegemonía social-liberal, como el tripartito catalán. La experiencia desoladora de la reciente reforma estatutaria está repleta de enseñanzas y merecería un estudio monográfico. Baste aperecibirse de la confusión y división que generan las fricciones entre dos gobiernos social-liberales –central y Generalitat– en torno a la financiación y los traspasos de competencias previstos por la nueva carta autonómica. Barcelona reclama, por ejemplo, el traspaso de la gestión de la red ferroviaria de cercanías. Pero resulta que el Parlament votó en su día la introducción de operadores privados en la explotación de la red... y eso hace que los sindicatos vean con recelo los traspasos, temiendo por el futuro de sus condiciones contractuales. El gobierno central, no menos favorable a las privatizaciones, pero poco decidido a implementar las concesiones que contempla el nuevo Estatut, se frota las manos ante tales contratiempos. Entre tanto, la izquierda “transformadora” tilda a los sindicatos ferroviarios de corporativistas e insensibles a las reivindicaciones catalanas. ¿Puede concebirse mayor despropósito? Otro tanto podríamos decir del traspaso de la gestión del aeropuerto del Prat, que la Generalitat reivindica con inusitada pasión junto a los sectores patronales que piafan de impaciencia por hacerse con ese jugoso negocio – tanto más provechoso cuanto más precarias sean las condiciones laborales del personal de tierra. Por no hablar del tema estrella: el sistema de financiación... Cualquier modelo que no emane de unas relaciones democráticas ha de ser por fuerza fuente de agravios. Pero si además el debate se sitúa entre dos gabinetes que apuestan por reducir impuestos a los más ricos y por las infraestructuras faraónicas, el conflicto –y su explotación demagógica– están garantizados de antemano.

En cualquier caso, parece indiscutible que la actualidad más inmediata como los problemas que se perfilan en el horizonte sbrayan la imperiosa necesidad para la izquierda de rearmar su discurso sobre la cuestión nacional. Están en juego su credibilidad y su futuro.

Lluís Rabell es militante de *Revolta Global-Esquerra Anticapitalista*.